

Perú: El paro cívico nacional del 14 de julio

Eduardo Toche*

* *Investigador
del Centro de Estudios
y Promoción
del Desarrollo
(DESCO), Lima, Perú.
Profesor
de la Universidad
Nacional Mayor
de San Marcos.*

El 14 de julio se realizó un Paro Cívico Nacional, convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en el que confluyeron diversas organizaciones políticas y sociales. En el papel, debió ser una demostración capaz de marcar rumbos ante la palpable precariedad política del momento, reflejada por las cifras de un dígito en las que oscilaba la popularidad presidencial desde meses atrás.

Todas las evaluaciones previas señalaban que la probabilidad de la caída del gobierno era muy alta y, en el mejor de los casos, resultaba difícil que pudiera continuar luego de finalizar el mes de julio. Así, propuestas como la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la declaración de la vacancia presidencial, que hasta entonces aparecían como globos de ensayo y de manera no tan abierta, empezaron a expresarse a viva voz.

Aunque nadie podía arriesgar un pronóstico, se estimaba que una masiva manifestación de protesta podía facilitar

los cambios políticos que se proyectaban y, sobre todo, servir para insertar las demandas populares en el debate. Sin embargo, luego del paro la situación no pareció variar mucho. El día siguiente fue más o menos igual a los previos, aunque con un Ejecutivo aún más arrinconado, no por la presión social sino por las evidencias de actos de corrupción cada vez más comprometedores.

En efecto, disipado el fugaz momento de evaluación de los resultados, los medios de comunicación volvieron a la acostumbrada letanía de revelar aparentes actos dolosos cometidos por los amigos y parientes del presidente. Esto no es un dato adjetivo reducible a una simple propensión al sensacionalismo que se asigna a la prensa peruana sino, por el contrario, un factor muy importante para establecer las correlaciones en la lucha política.

La corrupción en el eje político

La proclividad de los medios de comunicación hacia los hechos de corrupción del actual gobierno no debiera desvincularse del evidente esfuerzo que hicieron para no ahondar en los motivos y efectos del paro del 14 de julio, porque esa fórmula comunicacional señala claramente que los intentos de construir una alternativa política desde una plataforma social popular no es la única que busca asentarse, sino que incluso es la que menos fortaleza muestra.

Actualmente la política en el Perú no es un mecanismo movilizador que presione sobre la distribución del ingreso, justo cuando algunos sectores económicos muestran ganancias considerables, como la minería y las actividades exportadoras. En estas circunstancias, las acciones contra la corrupción se convierten en el blanco hacia donde apuntan los grupos dominantes.

Al inicio del actual ciclo democrático, inaugurado en 2001, se sabía que la lucha contra la corrupción imperante durante el régimen fujimorista no era un asunto restringido a la órbita legal. Por el contrario, era parte importante de los mecanismos que debían posibilitar cambios drásticos en las relaciones entre el Estado y los detentadores del poder. En efecto, algo que ha dejado en evidencia la persistencia de este tipo de actos es que si bien la corrupción del fujimorismo alcanzó niveles inéditos, no fue un asunto privativo de este régimen sino una continuidad histórica que lo antecedió y, peor aún, sigue vigente con el toledismo.

Veámoslo del siguiente modo. Según datos consignados por la revista *Quehacer*, el costo estimado de la corrupción sistemática del fujimorismo ascendería a u\$s 872.633.

“... no estamos ante la mera extensión de una modalidad delictiva. La envergadura del problema permite suponer que la corrupción es un factor indispensable para la reproducción del patrón histórico de acumulación”

En términos del impacto sobre el empleo, se estaría ante 163.706 puestos de trabajo que dejaron de crearse por haber sido desviados estos recursos de su uso productivo. En términos de la pobreza, el costo equivale a 155.400 personas que habrían logrado dejar su condición de pobres. De otro lado, hasta fines de 2003 el total de procesados por casos de corrupción ascendía a 1.401 personas (DESCO, 2003).

Entonces, no estamos ante la mera extensión de una modalidad delictiva. La envergadura del problema permite suponer que la corrupción es un factor indispensable para la reproducción del patrón histórico de acumulación. De esta manera, ha resultado muy eficaz argüir que, finalmente, “todos los gobernantes son corruptos” para desprestigiar cualquier intento de cambio en el ambiente que la hace posible. En todo caso, es en esto donde el gobierno del presidente Toledo muestra sus mayores debilidades, pues le resulta imposible superar las imposiciones provenientes del poder económico, cuyos voceros no dudan en señalarle los delitos que pueden haber cometido sus allegados aun cuando, ni por asomo, llegan a la dimensión vista durante los años ‘90.

Durante las últimas semanas han sido evidentes los intentos de debilitar e incluso destruir la procuraduría *ad-hoc* formada para investigar y denunciar los casos de corrupción. Desde el arzobispo de Lima, monseñor Juan Luis Cipriani, pasando por miembros visibles de grupos económicos, como Arturo Woodman del grupo Romero, y las constantes campañas de algunos medios de comunicación, todos buscan desprestigiar a los funcionarios de esa dependencia bajo el pretexto de una supuesta falta de imparcialidad, “debido a sus antecedentes ideológicos”.

De otro lado, los sectores que propugnan la paralización de los esfuerzos hechos contra la corrupción tienen importantes aliados entre los actuales mandos de las fuerzas armadas. Luego de resistir la reforma institucional que se intentó llevar a cabo apenas reinstalada la democracia

en el Perú, la jerarquía militar vuelve a manifestar una conducta muy similar a la vista en períodos anteriores, es decir, busca ensanchar la autonomía institucional mediante la inhibición de los mecanismos de control y transparencia, aumento en los gastos de defensa con la exacerbación de situaciones conflictivas, y absoluta impunidad para sus efectivos comprometidos en violaciones a los derechos humanos.

A todo ello habría que agregar que muchos de sus altos oficiales, como es conocido, están denunciados por sospechase de su participación en el sistema de corrupción o cumpliendo penas de cárcel por haber cometido este tipo de delito.

Bajo esta perspectiva, en la agenda de los que tienen mayor posibilidad de ejercer presión sobre las decisiones gubernamentales no se prioriza la democracia, y alimentan, en su lugar, salidas autoritarias. Así, la opción política frente a estas tendencias debería generar medios que otorguen sostenibilidad y profundización a la democracia. A su vez, no hay que perder de vista los afanes desmovilizadores que caracterizan el comportamiento de los que no se allanan a estos objetivos. Nada resulta más conveniente para estos intereses que reducir la política a un espectáculo cotidiano sin la menor capacidad de incidencia.

Pobreza y violencia

Ahora bien, la construcción de la democracia peruana debe llevarse a cabo en medio de profundas debilidades derivadas, en gran parte, de un factor estructural como es la generalizada pobreza imperante. Tal como lo demuestra el reciente informe del PNUD (2004), este es un dato generalizable a toda América Latina, que está experimentando la paradoja de llevar adelante democracias electorales en medio de una pobreza que crece en números absolutos y de niveles de desigualdad que se profundizan.

Pero esto no releva la necesidad de puntualizar las especificidades peruanas. Si algo resalta en nuestro caso es el casi sinsentido de querer impulsar la democracia sin actores políticos y sociales que la sustenten. Luego de las jornadas populares escenificadas entre 1998 y 2001, en las que cundió alguna expectativa ante lo que se creía la recuperación de las organizaciones sociales después de un largo receso provocado por el impacto del modelo económico neoliberal, la violencia política y el autoritarismo, no transcurrió mucho tiempo antes de que empezaran a notarse los profundos problemas que las atravesaban.

Los mecanismos articuladores dejaban mucho que desear, pero no por ello las demandas sociales desaparecían. Por el contrario, estas se habían embalsado y trataron de encontrar un cauce apenas instalado el gobierno del presidente Toledo, pero la ineptitud



© Diario La República

del Ejecutivo para preverlas y conducir en debida forma una transición política que se presenta bastante complicada, sumada a la casi inexistencia de organizaciones políticas y sociales representativas, hizo que estas se multiplicaran sin encontrarse una fórmula que permita solucionarlas.

Sin lugar a dudas hubo al menos voluntad para formar espacios que permitieran salidas consensuadas. Sin embargo, no funcionaron por la falta de una necesaria legitimidad entre los que actuaban en estos ámbitos. Por ello, desde iniciativas al más alto nivel, como el Acuerdo Nacional, hasta aquellas que intentan incidir en situaciones más específicas, como la participación ciudadana en los gobiernos locales y regionales, no despiertan mayores entusiasmos en la población.

En suma, estas carencias institucionales contribuyeron en buena cuenta a la formación de uno de los escenarios menos deseados, es decir, de conflictos con un alto grado de violencia, la mayoría de ellos dirigidos contra autoridades elegidas que, debido a la precariedad de su mandato, terminan siendo rápidamente el objetivo a donde apunta la insatisfacción de la población.

Hasta fines de mayo del presente año, la Defensoría del Pueblo reportó 50 casos de conflictos locales, de los que el 74% eran originados por cuestionamientos hechos contra autoridades municipales. Al siguiente mes el número se elevó a 59, y para mediados

[AÑO V N° 14 MAYO-AGOSTO 2004]

de julio ya eran 63¹. Entre ellos destaca lo ocurrido en Ilave, Puno, cerca de la frontera con Bolivia. Allí una enardecida turba linchó al alcalde, en el mes de abril, luego de haber transcurrido algunas semanas en que la violencia fue creciendo sin que las autoridades tomaran las acciones correspondientes para evitar el desenlace que finalmente presentamos.

Este fue un caso paradigmático, en que el imperio de la violencia debe comprenderse como el resultado de la acción excluyente del Estado, la amplia discrecionalidad poseída por grupos de poder locales, la fragmentación y dispersión de la denominada sociedad civil y, sobre todo, la profunda crisis de representación y legitimidad que se cierne actualmente sobre la política peruana (Degregori, 2004[b]).

Lo acontecido en Puno, sumado a las movilizaciones de los campesinos cocaleros, que entraban por entonces a su momento culminante, multiplicaron los pedidos de una “mayor presencia del Estado”, léase aumentar su capacidad represiva. El gobierno, ensimismado y sin capacidad de iniciativa, consideró llegado el momento de dejar las trincheras y saltar a la ofensiva. Lo hizo empleando el sentido común, es decir, de la manera más antipolítica posible.

Mediante un mensaje a la nación, el presidente Toledo anunció a fines de mayo su disposición a aumentar la penalización para aquellos que cometieran actos vandálicos aprovechando las acciones de protesta. Días antes, una ley –la 28.222– había sido publicada en el diario oficial *El Peruano*, disponiendo los criterios a utilizarse en las zonas declaradas en emergencia.

Pero la historia del gobierno y la presión para incentivar su “endurecimiento” no terminaron allí. Un confuso atentado en la provincia de Padre Abad, el 4 de junio, en el que elementos fuertemente armados, supuestamente miembros de Sendero Luminoso, asesinaron a dos miembros de la Policía Nacional y a un efectivo de la Marina de Guerra, fue el hecho más grave de una coyuntura en la que abundaron acontecimientos que gran parte de la prensa se dedicó a subrayar para afirmar que estábamos ante uno de los consabidos “rebotes terroristas”. Posteriormente, dirigentes politizados de los comités de autodefensa campesinos de la Sierra Central denunciaron el abandono en que los ha sumido el gobierno, en manifestaciones partidarias pro fujimoristas donde lucían sus armas, exigiendo además la reapertura de las bases militares en sus zonas.

Como era previsible, las amenazas gubernamentales no tuvieron el menor efecto. La primera semana de julio un nuevo foco de violencia explotó en Huamanga, Ayacucho, centro de la “guerra popular” conducida por Sendero Luminoso en los ‘80 y ‘90. Allí coincidieron dos dinámicas, una formada al interior del Sindicato Unificado de Trabajadores de

la Educación Peruana (SUTEP) con la tensión entre su dirigencia nacional y sectores radicalizados, que denunciaban las negociaciones de los primeros con las autoridades como un acto de traición contra los agremiados. La segunda eran las demandas y protestas que la población acumulaba contra los gobiernos regional y local.

Tal como aconteció en llave, los agentes del Estado tampoco hicieron nada por evitar la violencia. Luego de un evento gremial, la facción radical del SUTEP decidió quebrar lanzas con su dirigencia y, empleando la consigna de “gratuidad de la enseñanza”, empezó a realizar una serie de acciones violentas. Así, procedió a la toma de locales públicos de los que serían desalojados, provocando el levantamiento de la población.

No uno sino varios paros

Aun cuando el escenario se presentaba confuso, no era difícil concluir que había surgido una oportunidad para las organizaciones políticas y sociales. El alto rechazo hacia el gobierno podía servir como contexto para que estas buscaran retomar los vínculos con significativos sectores de la sociedad. Una respuesta es la que surgió de las conversaciones entabladas por la CGTP con la Coordinadora de Frentes Regionales, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria y el SUTEP, que acordaron finalmente la realización de un paro nacional de protesta.

Sin embargo, estas organizaciones no eran las únicas interesadas en promover un acto visible contra el gobierno y que a su vez sirviera para aparecer como exponente de los intereses de la sociedad. El Partido Aprista también buscaba fortalecer sus posiciones.

Meses atrás, al analizar la probable dimensión electoral que podría alcanzar su líder, Alan García, en las justas electorales de 2006, los dirigentes de ese partido tomaron nota de lo difícil que sería el triunfo si no convocaban a fuerzas ajenas a su organización. De otro lado, si bien los apristas habían estado manejando un discurso ambiguo, podía colegirse que se sentían más cómodos ubicándose en lo que podría llamarse una centro-izquierda.

Ambas cuestiones conducen al partido de García a propugnar un “frente social” que, en sus palabras, sería “un punto de encuentro, un espacio de diálogo entre el aprismo organizado y las instituciones nacionales, regionales y populares de la sociedad civil” (García, 2004). De esta manera, luego de que las organizaciones sociales arriba señaladas anunciaran la convocatoria del paro nacional, el APRA consideró pertinente sumarse a este esfuerzo aunque estableciendo claramente sus diferencias con las primeras y sus intenciones hegemónicas.

Hubo, además, otras organizaciones que también se aglutinaron en torno a este acto de protesta y, al igual que el APRA, buscaron el perfil propio, destacando entre ellas el izquierdista Partido Democrático Descentralista (PDD), que consideró que la jornada programada para el 14 de julio debía servir para poner en evidencia la crisis de la transición democrática y el agotamiento del gobierno toledista. Asimismo, estimó que ese era el momento para llamar a las fuerzas sociales y políticas a participar en una confluencia que tuviera como objetivo la fundación de una “nueva república, como alternativa efectiva de un cambio de rumbo”.

Entonces, como señaló Eduardo Ballón (2004), aquel 14 de julio no se llevó a cabo un paro nacional, sino varios de ellos. Además de las organizaciones convocantes, el APRA y los otros partidos, Ballón estimaba que ese día también se iban a expresar sectores como los campesinos cocaleros y los “miles de ciudadanos desencantados y hartos de un gobierno y un presidente que hacen méritos cotidianos para reafirmar tal sentimiento”.

Sin embargo, algo falló. Aunque importante, el impacto del paro nacional no fue el que hubieran querido sus auspiciadores. Es cierto que el sentimiento antigubernamental era y es muy extendido, pero pudo percibirse claramente que una gran parte de la población no estaba dispuesta a participar de esta jornada de protesta. Algunos analistas consideran que primó el temor. Pero todo parece indicar que el problema se localizó en el liderazgo y las formas adoptadas para la convocatoria.

Los dirigentes leyeron de forma acertada las debilidades ajenas pero no mostraron la misma aptitud respecto a las propias. El gobierno está sumamente desprestigiado pero ese dato es extensible al conjunto de los actores políticos del país, incluidos los que tuvieron protagonismo el 14 de julio. Basta detenerse un momento en lo que muestran las encuestas de opinión para notar que las distancias entre gobernantes y gobernados son considerables, y eso no es un asunto restringido a la poca capacidad del Ejecutivo sino a la generalizada ilegitimidad que fomenta causas como la crónica crisis de los partidos, ante las cuales existe poca propensión de enmienda. De esta manera, la población tuvo muchos motivos para protestar contra Toledo pero estuvo renuente a ser representada por líderes que los perciben como parte del problema.

De otro lado, fue visible el esfuerzo realizado por hacer aparecer al paro del 14 de julio como una reedición de las protestas antidictatoriales de fines de los '70, especialmente por aquellos que de una u otra forma responden a una línea de izquierda en el país. Aquellos episodios de lucha son considerados como los más importantes del siglo XX, junto a las movilizaciones por la jornada de las ocho horas de inicios de ese siglo.

“... no puede negarse el avance que significó, por ejemplo, plantear las demandas de las poblaciones agredidas por las grandes empresas mineras en sus derechos a la salud y un medio ambiente adecuado, en un ámbito que trascendió la dimensión local y regional”

No cabe duda de que dicha comparación era una exageración, pero lo más preocupante fue que no se hayan aquilatado las obvias diferencias entre una y otra situación. En ambos casos le tocó a la CGTP cumplir el rol estelar, aunque en el primer caso estábamos ante una situación en la que podía verse en acción un movimiento obrero muy vigoroso y con muchas capacidades para conducir la protesta popular, mientras que en la actualidad este sector simplemente no existe. Además, los paros de 1977 y 1978 tuvieron una etapa preparatoria muy intensa, en la que las propuestas eran discutidas y aprobadas por las bases de las organizaciones comprometidas, mientras que en esta oportunidad la plataforma de lucha fue elaborada y sancionada por una cúpula dirigencial que pudo tener las mejores intenciones pero que evidenció su relativa habilidad para coordinar democráticamente la gran variedad de demandas que deseaba expresar.

El resultado fue una plataforma de lucha consistente en una larga lista de reivindicaciones, todas ellas materia de recientes movilizaciones y reclamos por parte de algunos sectores sociales que sentían sus derechos afectados. Supuestamente, la CGTP consideró que esa era la forma de ser “representativa” y, aun así, si la cuestión era hacer mención a cuanta demanda y protesta existe hoy en el Perú, la CGTP y demás organizadores del paro no sólo estaban reaccionando algo tarde sino también de manera limitada.

La búsqueda de voceros que hicieran suyos sus respectivos pedidos era algo que los sectores sociales habían venido buscando desde tiempo atrás, sin encontrar respuestas convincentes. Asimismo, la simple sumatoria de reivindicaciones hecha por la CGTP no mostró lo que debían ser los primeros trazos de un proyecto popular y democrático. La importancia que se le dio a algunos rubros tampoco tuvo correspondencia con las prioridades sociales.

En cualquier caso, no puede negarse el avance que significó, por ejemplo, plantear las demandas de las poblaciones agredidas por las grandes empresas mineras en sus

derechos a la salud y un medio ambiente adecuado, en un ámbito que trascendió la dimensión local y regional. Tampoco que al borde mismo del colapso se haya tomado conciencia de lo profundamente democratizador que significa el proceso de regionalización. Asimismo, resulta positivo que se haya enfatizado sobre la necesidad de que la sociedad movilizadora haga suyas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y exija su cumplimiento.

Pero también hubo contradicciones y vacíos flagrantes. Por ejemplo, hubiese sido conveniente que los organizadores del paro nacional explicaran previamente a la ciudadanía por qué debía manifestarse en contra del ALCA y de los TLC. Al respecto, algunas organizaciones sociales multiplican sus esfuerzos con mucha voluntad pero sin mayores recursos y, lo que es peor, sin generar mayores compromisos entre los dirigentes de organizaciones que tienen más capacidad, como los de la CGTP. Más aún, al lado del llamado contra el ALCA se inscribió la propuesta de fortalecer la integración con los espacios económicos regionales, como MERCOSUR y Comunidad Andina, entre otros, sin haber considerado, al parecer, las protestas de agricultores y campesinos por la forma en que vienen conduciéndose estas últimas negociaciones.

Agregado a ello tuvimos un extenso acápite dedicado exclusivamente al transporte urbano, algo cuestionable y sólo entendible por la necesidad de garantizar el éxito de la jornada, posible únicamente si se comprometía su adhesión.

De vuelta a la realidad

Finalmente, no presenciamos la caída del gobierno, la violencia social sigue latente y los protagonistas del paro deben haber concluido en una evaluación negativa del mismo. Poniendo de lado consideraciones sobre la amplitud que pudo haber tenido la participación, en términos de los objetivos políticos que se quería alcanzar este dejó mucho que desear.

Días después, el 28 de julio, el presidente Toledo acudió al Congreso de la República para dirigir su mensaje a la nación. Contra lo que esperaba la oposición, las demandas puntualizadas en la convocatoria al paro nacional no fueron atendidas salvo, tal vez, un difuso llamado para que el Acuerdo Nacional definiera el mecanismo para las reformas constitucionales. Tampoco hubo referencias al cambio de política económica, ni convocatoria a una Asamblea Constituyente. Mucho menos rechazo a las negociaciones del TLC con Estados Unidos.

Aun así, no puede afirmarse tajantemente que el paro nacional no tuvo ninguna consecuencia política. Al parecer esfumó las exigencias de vacancia presidencial, y en su lugar

aparece como un punto de inflexión para el perfilamiento de los bloques políticos que aspiran competir en las elecciones de 2006.

Por ahora, ha cobrado dinamismo la posibilidad de formar un bloque de centro-derecha –aunque algunos de sus promotores prefieren hablar de derecha a secas– que compacte a todas aquellas organizaciones y personalidades que proponen el neoliberalismo como modelo económico a seguir. Allí estarían incluidos partidos tradicionales como Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, expresiones más recientes como Unidad Nacional, y líderes como Lourdes Flores, el actual presidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, tal vez el ex-presidente Valentín Paniagua, y seguramente muchos políticos que en la década pasada estuvieron identificados con el fujimorismo.

De otro lado, en la izquierda también se están presenciando algunas confluencias, como la del Partido de la Democracia Social con el Partido Humanista, destacando en este último Yehude Simon, actual presidente de la región Lambayeque. También se realizó la inscripción del Partido Democrático Descentralista, en donde se ubican conocidos dirigentes como el actual congresista Javier Diez Canseco.

También tenemos el nuevo bandazo del Partido Aprista. Si alguna sorpresa motivó el hecho de que apareciera promoviendo un acto masivo de protesta, apoyando sin decirlo medidas que motivarían más de una intranquilidad a los empresarios peruanos –luego de que Alan García les había prometido en el cercano noviembre de 2003, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), que un futuro gobierno de su partido les sería beneficioso–, su conducta luego del paro fue más allá de todo pronóstico.

Sólo días después de este hecho, el 22 de julio, García y otros dirigentes de su partido afirmaban en EE.UU., ante empresarios y políticos de ese país, que él era un “izquierdista moderno” y, como tal, su objetivo era atraer inversión hacia el Perú. Además, consideró que no era conveniente insistir en la renuncia del presidente Toledo y que en su lugar se tendrían que ver los mecanismos a usar para que pueda culminar su mandato.

Aun así, la probabilidad de su retorno a la presidencia es todavía baja para García. Fracasado su intento de formar un “frente social” para que lo respalde electoralmente², se dirigió hacia los empresarios e inversionistas y allí encontró poco menos que silencio como respuesta. Los altos niveles de desconfianza que García mantiene en estos círculos es uno de los problemas que aún no ha podido resolver.

Finalmente, hay un actor político en la primera línea que aparenta no estar en la contienda: el fujimorismo. Está claro que su prófugo líder no podrá presentarse en las elec-



© Diario La República

ciones de 2006, por tener cuentas pendientes con la justicia peruana. Pero esto no impide que una organización compita bajo sus auspicios y, tal como demuestran los sondeos de opinión, probablemente logre obtener un importante número de congresistas.

Sabiéndose desde ya que ningún partido por sí solo podrá alcanzar una base electoral suficiente como para obtener un triunfo con sus propias fuerzas, las probabilidades de que se disputen el apoyo de los fujimoristas, indispensable para imponerse en una probable segunda vuelta, son muy altas. De ser así, será obvio que el respaldo se cambiará por impunidad.

En todo caso, lo positivo de estos reagrupamientos es haber actualizado el debate sobre las izquierdas y derechas en el país. Se entiende que la búsqueda de una identidad política es parte de las tareas que deben ejecutar los partidos para reanimar su débil representatividad. Pero sus respectivas reestructuraciones aún están lejanas y, mientras tanto, siempre está presente el peligro de que la ausencia de institucionalidad provoque escenarios de violencia social que, tal como ocurrió en el pasado reciente, se rebalsen sin control alguno.

Durante las últimas semanas, los campesinos cocaleros vienen alistando un nuevo ciclo de protestas, los pueblos nativos asháninkas de la Selva Central han estado en alerta ante las agresiones provocadas por las empresas madereras presentes en sus territorios, algunas universidades públicas presentan serios conflictos entre los estudiantes y las

autoridades, y en diversas partes del país se han producido enfrentamientos violentos entre pobladores debido a disputas por recursos.

Una situación como ésta provoca el extremo fraccionamiento tanto social como político y facilita la vigencia de *outsiders*, con toda la carga negativa que esto significa para la salud democrática. Algo que pasó casi desapercibido fue la realización del primer congreso de la nación aymara en Ilave, el lugar donde meses atrás fue linchado el alcalde de la ciudad. Allí participaron, entre otros, el conocido dirigente campesino Hugo Blanco y el ultranacionalista Antauro Humala.

Mientras el primero hizo un llamado para construir “una alianza de los excluidos” para presentarse con fuerza en los espacios políticos, Humala simplemente invitaba a la violencia, “recurriendo a ‘Rebelión en la granja’ y llamando a dejar de ser chanchos que piden camote para degollar al granjero de rostro cambiante” (Degregori, 2004[a]). No está de más decir que fue este último el que cosechó los mayores aplausos.

En el otro extremo del país, en Lima, parecía formarse una coyuntura de distensión. Luego de que el presidente Toledo anunciase su deseo de ser investigado para disipar las sospechas de corrupción que recaían sobre él, agregado el hecho de que la presidencia del Congreso fue asumida por la oposición, la aprobación de su gestión pasó del 7% al 15%.

La ilusión de que se aprovechara esta levísima mejoría colisionó muy pronto con la realidad. Esta parte del país no mira a las otras. Integrantes del partido gobernante, Perú Posible, volvieron a la carga y exigen algunos ministerios que están dirigidos por independientes, como los de Trabajo y Salud, sin considerar que las actuales gestiones tienen una alta aceptación ciudadana. Asimismo, las expectativas formadas en torno al arribo de la oposición a la presidencia del Congreso vienen diluyéndose rápidamente en medio de la inoperancia y el escándalo: a un mes de instalada la actual Legislatura, las comisiones parlamentarias no pueden conformarse por desacuerdos entre los diversos grupos parlamentarios.

Bibliografía

Ballón, Eduardo 2004 "Los mil y un paros", en *Quehacer* (Lima: DESCO) N° 148, mayo-junio.

Degregori, Carlos Iván 2004[a] "Chorreo, mami, chorreo", en *Perú 21* (Lima) lunes 16 de agosto.

Degregori, Carlos Iván 2004[b] *llave: desafíos de la gobernabilidad, la democracia participativa y la descentralización* (Lima: Grupo Propuesta Ciudadana) Cuadernos Descentralizados N° 13, julio.

DESCO 2003 "El costo de la corrupción sistémica", en *Quehacer* (Lima: DESCO) N° 144, septiembre-octubre.

García, Alan 2004 "El Frente Social: los últimos serán los primeros", en *Correo* (Lima) 11 de julio.

PNUD 2004 *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas* (Lima).

Notas

1 Ver reportes de conflictos sociales en <<http://www.ombusdman.gob.pe>>

2 La conducta del APRA durante el paro nacional y después de él parece haberlo distanciado de los dirigentes de la CGTP, Mario Huamán y Juan José Gorriti. De otro lado, Patria Roja, un partido originalmente maoísta que declara actualmente sus abiertas simpatías hacia Cuba y Hugo Chávez, no ha negado la posibilidad de arribar a acuerdos con los apristas.